



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

Los cambios introducidos en la Ley de Montes por la Ley 21/2015 y su impacto en la legislación forestal riojana

Autor/es

DIANA MARTÍNEZ DE QUEL FERNÁNDEZ VELILLA

Director/es

RENÉ JAVIER SANTAMARÍA ARINAS

Facultad

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Titulación

Grado en Derecho

Departamento

DERECHO

Curso académico

2016-17



Los cambios introducidos en la Ley de Montes por la Ley 21/2015 y su impacto en la legislación forestal riojana, de DIANA MARTÍNEZ DE QUEL FERNÁNDEZ VELILLA

(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright.



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

TRABAJO FIN DE GRADO

**LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA LEY DE
MONTES POR LA LEY 21/2015 Y SU IMPACTO EN LA
LEGISLACION FORESTAL RIOJANA**

DIANA MARTÍNEZ DE QUEL FERNÁNDEZ-VELILLA

**TUTOR
RENÉ JAVIER SANTAMARÍA ARINAS**

**GRADO EN DERECHO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

Resumen:

La Ley 21/2015, de 20 de julio, introdujo en la Ley, 43/2003, de 21 de noviembre, de montes muchas de las modificaciones que se venían demandando tanto por las legislaciones autonómicas, que en algunos casos estaban más avanzadas, como por las políticas europeas. Algunos de estos cambios traen repercusiones en la legislación autonómica en materia de montes de La Rioja. En este trabajo, analizaremos estas modificaciones y su afectación a la legislación riojana.

Palabras clave:

Monte, modificaciones, patrimonio forestal, La Rioja, Administración, legislación.

Summary

Law 21/2015, of 20 July, introduced into Law 43/2003 of November 21, many of the modifications that had been demanded by the autonomous legislation, which in some cases were more advanced, and European policies. Some of these changes have had repercussions in the regional legislation on the mounts of La Rioja. In this paper, we analyze these modifications and their effects in the legislation.

Keywords

Mount, modifications, forestry patrimony, La Rioja, administration, law

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
1. CONCEPTO DE MONTE	6
2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA	9
3. REPARTO COMPETENCIAL	11
4. DERECHO EUROPEO EN MATERIA FORESTAL.....	12
5. MODIFICACIONES DE LA LEY 21/2015.....	14
5.1. Ampliación de ámbito de aplicación de la Ley del concepto de monte.	14
5.2. Introducción de un nuevo principio inspirador: montes como infraestructura verde	15
5.3 Clasificación más específica de los montes, pudiendo pertenecer solo a una de las categorías	16
5.4. Simplificación administrativa de los instrumentos de gestión y de los procedimientos de administración forestal.	17
5.5 Potenciación de la Certificación Forestal (PEFC)	19
5.6. Regulación nueva de los montes de socios y la creación de Sociedades Forestales	19
5.7. Promoción de la biomasa forestal como fuente de energía renovable	20
5.9. Otras medidas	22
6. LEY RIOJANA DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO FORESTAL.....	23
6.1. Diferencias en la legislación estatal y la Ley de protección forestal riojana	24
6.1.1. Concepto de montes	24
6.1.3. Clasificación más específica de los montes.....	25
6.1.4. Instrumentos de gestión y de los procedimientos de administración forestal.....	26
6.1.5 Potenciación de la Certificación Forestal (PEFC)	27
6.1.6. Regulación de los montes de socios y la creación de Sociedades Forestales	28
6.1.7. Biomasa forestal como fuente de energía renovable	29
6.1.8 Otras medidas relativas a los incendios, la caza, acceso público a los montes.	30
6.1.9. Procedimiento sancionador	31
CONCLUSIONES	32
BIBLIOGRAFÍA	34

TABLA DE ABREVIATURAS

AAPP	Administraciones Públicas
Art./s.	Artículos
CAR	Comunidad Autónoma de La Rioja
CCAA	Comunidades Autónomas
CE	Constitución española
DA	Disposición Adicional
FLECT	Forest Law Enforcement, Governance and Trade
ICONA	Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza
LM	Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
Ley 10/2006	Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
Ley 21/2015	Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes
LO	Ley Orgánica
PAC	Política Agrícola Común
PEFC	Asociación para la Certificación Española Forestal
PORF	Planes de Ordenación de Recursos Forestales.
Reglamento (UE) núm. 1305/2013	Reglamento (UE) n ° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n ° 1698/2005 del Consejo
TRRL	Texto Refundido de Régimen Local
UE	Unión Europea

INTRODUCCIÓN

Los montes ocupan el 55,1% de la superficie de España, lo que le sitúa como el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Suecia, en bosques, según los indicadores ambientales de 2015 presentados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En La Rioja, la superficie forestal, tras el último estudio realizado en 2013, es de 311.000 hectáreas, lo que corresponde al 62% del territorio, siendo en porcentaje siete puntos superior a la media estatal.

El estudio señala que de los 50 millones de hectáreas de superficie total de España, el 36,7% está ocupada por bosques; el 28% por tierras de cultivo; el 16,4% por matorral y suelo desnudo; el 13,9% por pastizales y el 5% restante por superficies edificadas, carreteras o ferrocarriles.

En total, el 40,5% de la superficie forestal en España está protegida (11,2 millones de hectáreas) y de esta, la mayor parte -7,4 millones de hectáreas-, está arbolada, mientras que en torno al 70% de la superficie protegida es forestal. En cuanto a los incendios, señala que en 2015 afectaron a 102.946 hectáreas, lo que afecta al 0,37% de la superficie forestal española.

La Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003 de montes, ha sido una de las más controvertidas de los últimos años. Ha tenido puntos muy polémicos que le han hecho ganarse muchos detractores, pero también algunos de los cambios introducidos se consideraban totalmente necesarios. Modificaciones como el cambio de uso de los incendios forestales, el acceso motorizado a los montes y las medidas relativas a los agentes forestales han sido las más criticadas, tanto por los propios afectados como por muchos de los expertos en materia de legislación de montes.

He querido centrar mi trabajo en el análisis de esas últimas modificaciones introducidas en la Ley de montes. Además, debido a que nos encontramos en La Rioja, me ha parecido interesante estudiar su repercusión en la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja.

1. CONCEPTO DE MONTE

Según la Real Academia Española, se puede definir la palabra “monte” (del lat. *Mons.*, *montis*) como una gran elevación de terreno o una tierra inculta cubierta de árboles, arbustos, matas o hierba.

Para el derecho, la palabra monte va mucho más allá. Según el artículo 5 de la Ley de Montes actual, un monte es *“todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.”* Además, incluye dentro de la consideración de monte otros terrenos más específicos que igual no se entienden dentro de él con la primera definición como son *“los terrenos yermos, roquedos y arenales; las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican; los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal; todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable; y por último, los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada por la Comunidad Autónoma.”*

Podríamos considerar esta definición como *amplia*, ya que los montes ocupan el 55% de la superficie geográfica española; *ambigua*, ya que podemos englobar dentro de él tanto a la selva de Irati como al Desierto de los Monegros; y *abierta*, puesto que es una competencia compartida y las CCAA tienen potestad para hacer las precisiones correspondientes. Calvo Sánchez propuso en 2003 una propuesta metodológica que integra:

- Núcleo del concepto: “terreno”, “en el que vegetan especies forestales”, “que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas”.

- Periferia del concepto: incluye yermos, roquedo y arenales: infraestructuras al servicio del monte; terrenos agrícolas abandonados con signos inequívocos de su estado forestal en las condiciones y plazos que determinen las CCAA; otros terrenos que se

“adscriban” a la finalidad de ser repoblados y enclaves con la superficie mínima que determinen las CCAA (art. 5.1.LM).

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en una publicación en 2014, “*los montes proporcionan una gran variedad de servicios ecológicos, sirven de hábitat para las especies de plantas y animales, ayudan a proteger los recursos hídricos y del suelo, contribuyen a la lucha contra el cambio climático, y ocupan el 55% de la superficie geográfica española*”. Asimismo, los montes son un “*factor económico importante como proveedores de madera y otros productos forestales y por su papel en la diversificación de las economías en las zonas rurales*”.

El monte es un terreno *rústico*, pero no agrario, por lo que existen controversias a la hora de su uso mixto, véase las dehesas recogidas en el artículo 39 LM, o los usos temporales, artículo 40.2 LM y artículo 5.4 que somete a régimen intensivo a las plantaciones de especie forestales de turno corto sobre terrenos agrícolas.

Además, el monte es un terreno no urbano *ni urbanizable* (art 39 LM), por lo que se requerirá un informe de la Administración competente en gestión forestal, que será vinculante para montes catalogados o protectores, para llevar acabo instrumentos de planeamiento urbanístico.

En lo que respecta a la recalificación de terrenos forestales incendiados que impone el artículo 50 LM, se ha introducido con la última reforma de la Ley de Montes, Ley 21/2015, una nueva excepción a la prohibición de 30 años que ya estaba establecida. Se permitirá el cambio de uso cuando “*por razones imperiosas de interés público apreciadas mediante ley*” lo determine.¹

Al ser una competencia “compartida”, las CCAA que han desarrollado su propia legislación sobre montes y terrenos forestales (anexo I: directorio legislación) han establecido su propia definición de monte. La ley riojana de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal, Ley 2/ 1995, de 10 de febrero, engloba dentro del concepto de “*monte o terreno forestal*” (art. 4):

1.Modificación en función de la declaración de inconstitucionalidad (STC 162/2014, de 7 de octubre) de la Ley de las Cortes de Castilla y León 2/2010, de 28 de mayo , de declaración del proyecto regional del “Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski”.

- a) *Los terrenos rústicos poblados por especies o comunidades vegetales, siempre que no sean características del cultivo agrícola o fueren objeto del mismo.*
- b) *Los sotos naturales y masas arboladas ubicadas en las riberas y zonas de policía de los cauces públicos.*
- c) *Los terrenos sometidos a cultivo agrícola que constituyan enclaves en los montes, excepto los enclavados de propiedad particular cuyo aprovechamiento se ejerza regularmente al menos en los últimos cinco años.*
- d) *Los terrenos rústicos de cualquier naturaleza que sean declarados como terreno forestal por la Administración de la Comunidad Autónoma al estar afectados por proyectos de corrección de la erosión, repoblación u otros de índole forestal.*
- e) *Los terrenos cuyo cultivo agrícola esté abandonado por un plazo superior a diez años y tengan una pendiente media superior al 20%.*
- f) *Los pastizales de regeneración natural, humedales, tuberías y los terrenos ocupados por infraestructuras forestales*

2. Se considerarán, asimismo, como terrenos forestales los que se dediquen temporalmente a la producción de maderas o leñas, mientras dure su establecimiento, que no podrá ser inferior al turno de la especie de que se trate”.

Poniendo interés, además, en algunas precisiones que hace el Decreto 114/ 2003, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja incluyendo a los terrenos agrícolas objeto de reforestación, determinando un plazo inferior a 15 años para los terrenos forestales temporales y estableciendo como terrenos forestales arbolados a “*los territorios poblados con especies forestales arbóreas como manifestación vertical de estructura vegetal dominante y con una fracción de cubida cubierta por ellas igual o superior al 10%”.*

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La primera Ley de montes que nos interesa es la de 1957 y su reglamento de 1962, que venían a sustituir, casi 100 años después, a la Ley de montes vigente desde 1863. Hay que destacar que en la época franquista se legisló más sobre montes particulares de lo que se había hecho en cualquier época anterior. Esto se debe a que la conservación y administración de los montes privados se entendió como una cuestión de interés general justificado, en parte, por su valor económico. Además de poner en jaque el valor económico de los montes, también se intensifica su visión protectora y la relevancia del mundo rural en los montes, por lo que se establecen medidas relativas a estos preceptos.

Los años 70 destacan por las políticas forestales que se incorporaron a la Ley del 57, como son los primeros planes de desarrollo forestal, el nacimiento de ICONA², y los incentivos que incrementan la actividad productora en los montes, entre las más destacadas.

La Ley de Montes del 57 no respondía al panorama forestal que la CE había marcado, por lo que era necesaria una legislación estatal que sirviera como base. Dicha normativa no fue aprobada hasta el 2003, Ley 43/2003, de 21 de noviembre, ley vigente hasta el momento a pesar de haber sido objeto de numerosas reformas. Así pues, con el Reglamento de 1962 no sucedió lo mismo, pues no fue derogado en tanto no se opusiera a lo previsto en esta ley y hasta la entrada en vigor de las normas que se dictaron para su desarrollo, además de las leyes autonómicas.

La Ley 43/2003 vino a constituir una base fundamental en materia forestal, configurándose como instrumento eficaz para la gestión forestal sostenible. Como se ha detallado anteriormente, el camino estaba ya marcado por algunas Comunidades Autónomas y su legislación específica sobre la materia, además de por la política comunitaria.

2. ICONA que sustituyó en 1974 al Patrimonio Forestal del Estado y se encarga de la protección de los montes y tiene carácter medioambiental...Fue suprimido en 1991 por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, al asumir las CCAA la mayoría de sus competencias.

3. "El marco político e institucional, el contexto económico y social, el nuevo paradigma ambiental marcado especialmente por las tendencias internacionales..." Exposición motivos Ley 43/2003, de 21 de noviembre.

Esta Ley revitalizó el papel de las entidades locales en materia forestal (art 9 LM), dotándolas de competencias propias y de poder de participación en algunas de las materias competencia de las CCAA, véase en la elaboración de los planes de ordenación de los montes. No olvidemos que la mayor parte de los montes de titularidad pública en España pertenecen a las entidades locales. Es cierto que ya existían previsiones en el TRRL de 1986, pero estaban “muertas”, y se permitió su participación” en la adopción de decisiones que inciden directamente sobre su territorio forestal”, además de reconocerlas como “propietarios forestales públicos”.

En el 2006, se consideró necesaria una modificación parcial, pero muy significativa de la Ley 43/2003 al encontrar deficiencias en algunos preceptos a la hora de su aplicación, destacando la lucha contra los incendios forestales, además de otras que vinieron determinadas por la Unión Europea (el 27 de enero de 2003 se adoptó la Decisión Marco relativa a la protección del medio ambiente a través del derecho penal).

Dicha Ley fue objeto de algunos problemas, pues en 2007, con la Ley 42/2007, del Patrimonio natural y de la biodiversidad (LPNB) y en 2009 con la “Ley omnibus”, Ley 25/ 2009, se vio modificada.

Por último, pero a la vez más importante, la modificación más actual de la ley se produce en 2015, con la Ley 21/2015. Problemas competenciales y legislativos han sido los detonantes de esta modificación, pues tanto las Comunidades Autónomas como algunos agentes del medio forestal venían reclamando algunos cambios. Contábamos con el precedente del “Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal” que se aprobó en 2014, donde se canalizaban las nuevas inversiones en materia forestal con una duración de 7 años. No obstante, la influencia de las políticas europeas impuestas en la PAC 2014-2020⁴ y anteriores reglamentos han sido determinantes para marcar el camino de esta reciente reforma de la LM.

4. PAC 2014-2020: Acuerdo europeo de política agrícola común que busca hacer frente a los nuevos retos a los que se enfrentan la agricultura y las zonas rurales en los próximos años que vienen determinados en su mayoría por factores externos a la agricultura y, por tanto, requieren una respuesta política más amplia. Reglamento UE núm. 1305/2013.

3. REPARTO COMPETENCIAL

La Ley de 1957 se mantuvo vigente durante varios años, pero con la aprobación de la Constitución española se dotó a los montes de un valor ambiental, dándole un mayor protagonismo frente a otras propiedades. El artículo 45 de la CE⁵, determina los montes como recursos naturales, lo que provoca un cambio de concepto del monte debiendo aplicar la legislación ambiental sobre estos.

La Constitución no solo garantiza un derecho, sino que impone un deber tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos. Por un lado, los ciudadanos tienen el deber de conservarlo, y por otro, los poderes públicos deben velar por su racional uso, defensa y restauración. Es así como en 1978, el medio ambiente y los bosques pasaron a formar parte de uno de los pilares consolidados de la política estatal.

Otros preceptos constitucionales vinieron afectando a la legislación de montes que hasta el momento estaba vigente en España. El artículo 33, entre otros, donde se determina el derecho a la propiedad privada, y sus excepciones en cuanto a la función social de los bienes, que somete a los montes, incluidos los privados, a un régimen mayor de intervención administrativa.

Uno de los puntos más significativos, y a la vez controvertidos, de la legislación de montes en España es el del reparto competencial. La CE determina que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en “materia de montes y aprovechamientos forestales” (art. 148.1.8º CE), mientras que el artículo 149.1.23º da al Estado competencias en legislación básica sobre protección del medio ambiente, montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Hablamos de controvertido por el trabajo jurisprudencial que hace latente los problemas que esta competencia “compartida” ha supuesto. Son numerosas las sentencias relativas a este problema. Por ejemplo, sentencias recientes como STC 97/2013, de 23 de abril, la Junta de Castilla y León, STC 84/2013, de 13 de abril, Comunidad Autónoma de La Rioja, y STC 49/2013, de 28 de febrero, Generalitat de Cataluña; todas ellas por recursos de inconstitucionalidad de preceptos de la Ley 10/2006.

5. El artículo 45 de la CE, ““1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo 2. los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”

En los años posteriores a la Constitución Española, prácticamente todas las Comunidades Autónomas de nuestro país desarrollaron sus Estatutos de autonomía, donde asumieron competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales.

Respetando el reparto competencial, pero sin tener clara la legislación básica a seguir, pues la ley del 57 no se ajustaba a las necesidades forestales del momento ⁶.

A pesar de no haber un desarrollo legislativo estatal en materia forestal correlativo a los cambios hasta el año 2003, algunas Comunidades Autónomas desarrollaron sus propias leyes en materia forestal que venían a recoger los principios y objetivos actuales y que, a pesar de haber sufrido algunas modificaciones, siguen vigentes. Es el caso de la Ley riojana 2/1995, de Protección y Desarrollo del Patrimonio.

4. DERECHO EUROPEO EN MATERIA FORESTAL

En relación al Derecho europeo en materia de montes, no existe una legislación forestal común como tal a pesar de ser uno de los elementos imprescindibles dentro de los objetivos de la UE. No obstante, el sector forestal se ve afectado por determinadas políticas comunitarias como el Acta Única Europea de política medioambiental, las políticas de desarrollo rural para favorecer la cohesión económica social, la protección contra los incendios y contaminación atmosférica, conservación de la biodiversidad (Natura 2000), aplicación del Convenio sobre el cambio climático, investigación e, incluso, competitividad de la silvicultura.

La política forestal europea se caracteriza por dos elementos; el primero de ellos es un objetivo, la preocupación por los valores medioambientales de los montes; y el segundo es como instrumento, siendo los montes los protagonistas de acciones de fomento a través de subvenciones y ayudas.⁷

Cabe destacar entre esas políticas la PAC 2014-2020, en materia de gestión, conservación y desarrollo sostenible de los bosques.

⁶

6. Destacamos el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja, donde con la LO 3/1982 que aprobaba su Estatuto de Autonomía se reconoce las competencias en desarrollo legislativo y ejecución en materia de montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos (art. 9.11 EAR).

7. Francia y Alemania, son un ejemplo a seguir en la aplicación de las políticas forestales europeas. Francia con un Código Forestal y a través de la Reforma del 9 de julio de 2001 donde la política forestal toma partido en la toma de decisiones de otras políticas que le puedan afectar. Alemania, con su ley de conservación de montes y fomento de 1975, reformada en 2001, donde plasma como objetivos la protección del medio ambiente y la explotación económica sostenible de los montes, además de apostar por el desarrollo rural.

La PAC ha marcado tres objetivos importantes para 2020, dirigiendo dos de ellos a “impulsar las medidas forestales como parte integrante del desarrollo rural”. En primer lugar, gestionar los recursos naturales de un modo sostenible y adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, de acuerdo con los objetivos marcados en la Agenda 2020; y en segundo, alcanzar un desarrollo territorial equilibrado, orientado hacia la diversificación de la actividad agrícola y la viabilidad de las zonas rurales. La PAC pretende la consolidación del Sector Forestal a través de estos objetivos apoyándose en dos pilares fundamentales, que a pesar de ser medidas diferentes se pueden complementar a la perfección impulsando más aun la estrategia de la PAC.

Esta medida consiste en que se debe reservar al pago verde el 30% de la dotación nacional. (DA 2ª reforma LM 2015).

En su aplicación al derecho español se ha determinado que, además, los beneficiarios de estos pagos directos podrán acogerse a dos medidas: mantenimiento de pastos permanentes en los montes y de las superficies de interés ecológico (Reglamento 1307/ 2013).

El segundo pilar (Pilar II), con medidas voluntarias mejor adaptadas a las especificidades nacionales y regionales (ayudas al desarrollo rural). Establece una serie de medidas ambientales (pagos por servicios ambientales) financiadas por la FEADER⁸ como la forestación y creación de superficies forestales, el establecimiento de sistemas agroforestales y mejora de infraestructuras de las fincas, ayuda al amparo de la Red Natura 2000 y el impulso de una economía hipo carbónica y adaptada al cambio climático, entre otras. (arts. 22 a 34 Reglamento (UE) núm. 1305/2013).

Por proximidad e interés, hacer mención a la *7ª Conferencia Ministerial del proceso paneuropeo Forest Europe*, celebrada el 21 de octubre de 2015 en Madrid, a pesar de no haberse podido conseguir firmar el Acuerdo Global sobre Bosques a nivel mundial que se lleva persiguiendo desde la Cumbre de Río 92.

8. FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

5. MODIFICACIONES DE LA LEY 21/2015

Como ya hemos dicho anteriormente, más de diez años después de su aprobación, y con algunas otras reformas detrás (véase la de 2006, Ley 10/2006) se consideraba necesaria una reforma sustancial de la LM 43/2003 atendiendo a las reclamaciones autonómicas, las imposiciones europeas ya mencionadas y a los avances en el desarrollo de conceptos.

La Ley 21/2015, de 20 de junio, por la que se modifica la LM 43/2003, y protagonista de este trabajo, no ha dejado a nadie indiferente, ya sea por sus modificaciones más conflictivas como por las innovaciones medioambientales que se han incorporado y que tanto tiempo llevaban demandándose por el sector. Las principales modificaciones de la Ley 21/2015, que modifica la LM, se basan en:

- Ampliación de ámbito de aplicación de la Ley y del concepto de monte
- Introducción de un nuevo concepto inspirador: montes como infraestructura verde
- Clasificación más específica de los montes, pudiendo pertenecer solo a una de las categorías.
- Simplificación administrativa de los instrumentos de gestión
- Potenciación de la Certificación Forestal
- Regulación nueva de los montes de socios y la creación de Sociedades Forestales.
- Promoción de la biomasa forestal como fuente de energía renovable
- Otras medidas relativas a los incendios, la caza, la tala, acceso público a los montes.

5.1. Ampliación de ámbito de aplicación de la Ley del concepto de monte.

Esta modificación tiene que ver con los terrenos agropecuarios. Se incorpora al concepto de monte (art.5.4. LM) las plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo sobre terrenos agrícolas, sometiéndolas al régimen de los montes durante la vigencia de los turnos de aprovechamiento previamente establecidos.

Además, se llevan a cabo algunas precisiones en cuanto al ámbito de aplicación en otros puntos de la reforma. En el artículo 2 LM, en sus apartados 2 y 3, se precisa sobre la aplicación de esta Ley en los terrenos de condición mixta agrosilvopastoral, en

particular en los terrenos adhesados; al igual que en los montes o fracciones de monte incluidos como espacios naturales protegidos, respetando la legislación específica.

Blasco Hedo hace referencia a una matización importante, pues no hay que olvidar que un monte no es un cultivo agrícola, a pesar de que algunas de estas plantaciones se destinen directamente a su aprovechamiento energético.

5.2. Introducción de un nuevo principio inspirador: montes como infraestructura verde

Tal y como ha venido disponiendo la Unión Europea en sus políticas medioambientales, se introduce el término “Infraestructura verde” dentro de la consideración de monte con el objetivo de mejorar el capital natural y su consideración en la mitigación del cambio climático (art. 3.1. LM). El Gobierno de Aragón en el art 4.2.de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, calificó a los montes como “infraestructura natural básica de la CCAA”.

Con esta modificación, se intenta perfeccionar el concepto de monte, pues es uno de los sistemas naturales prestadores de servicios ambientales de primer orden. Aun así, no debe considerarse al monte como una “manta verde” de zonas y espacios protegidos, tal y como da a entender la Comunicación de la Comisión al Parlamento, Consejo, Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM 2013 249 final, de 6 de mayo de 2013). Además, con este concepto se permite perfeccionar el “equilibrio entre los pilares imprescindibles de la gestión forestal: económico, ecológico y social”.⁹

Este principio da lugar a otra modificación, que a pesar de que ya se presuponía antes de la reforma (el artículo 4 de la Ley 43/2003 modificado en 2006 ya reconocía la función social de los montes) se le ha reservado un artículo propio donde quede reflejado y no dé lugar a interpretaciones: la multifuncionalidad de los montes. En el artículo 3 LM, se recogen todos los principios inspiradores de esta ley. Desde la gestión sostenible, la planificación forestal en el marco de la ordenación del territorio hasta la creación de empleo y el desarrollo del medio rural y el fomento de producciones forestales y actividades económicas, sin olvidarse del recién incorporado como principio medioambiental.

9. Preámbulo de la Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la LM.

Estos doce principios son la base fundamental de esta legislación y dejan entrever la multifuncionalidad de la figura del monte (art. 4 LM). La multifuncionalidad del monte, como recurso natural y sustento de actividades económicas medioambientales, con el factor social y cultural de por medio, requiere la defensa y la adecuada combinación de los tres pilares para conseguir la armonización de los intereses de la protección forestal.

Los poderes públicos deberán velar por el equilibrio entre las actividades económicas, que son imprescindibles como motor de la conversación, y la protección de los sistemas forestales.

5.3 Clasificación más específica de los montes, pudiendo pertenecer solo a una de las categorías

La nueva legislación modifica la clasificación de montes sin olvidar la estructura anterior de montes privados y públicos, pero simplificándola a si tienen o no interés general no pudiendo pertenecer a las dos categorías. Son grupos disjuntos con una doble clasificación; en primer lugar por su titularidad pública o privada, y en segundo lugar, por su afección a un interés general, siendo éste el factor determinante para la gestión forestal a la que será sometido el monte. Los montes solo podrán pertenecer a una sola categoría. (Se suprimen los arts. 12 bis, 24 bis y 24 ter y se modifica los arts. 13, 24 y 25).

-Si cumplen una función de interés general (“acreedores de una peculiaridad para justificar la regulación” y el tratamiento de la Administración). Si son públicos, son parte del “*Dominio Público Forestal*”, y podrán tomar la clasificación de montes de *utilidad pública, montes comunales* u otros que hayan sido afectados a un uso o servicio público. Si son privados, se declaran *protectores* ¹⁰.

-Los montes que no cumplan una función de interés general; si son públicos, son montes *patrimoniales*, y si son privados, son montes *particulares o montes vecinales en mano común*. (ANEXO III: clasificación montes)

Las modificaciones no se quedan en la mera clasificación, sino que a partir de esta nueva clasificación se determinan los mecanismos para la gestión de los montes:

10. Son aquellos montes privados que cumplan alguna de las condiciones que para los montes públicos establece el artículo 13 (art. 24 LM).

- Los montes públicos, cuando su uso es privativo, deben someterse al régimen de concesión administrativa. En cambio, si el uso es público, tendrán libertad siempre y cuando se lleve a cabo de manera ordenado con un instrumento de gestión. (artículo 15 LM)
- Modificaciones importantes en la Recuperación posesoria y deslinde de los montes públicos (art. 20 y ss. Capítulo III, Título II LM). Mayor control de la Administración con un mayor número de documentos acreditativos, por un lado. En cuanto a la eficacia del acto del apeo solo tienen validez los registrados y los dictados en sentencia firme en juicio declarativo. Además, dejan a un lado la calificación de montes demaniales por la de montes públicos.
- En el ámbito de los montes privados, a partir de ahora sus titulares deberán regirse por lo dispuesto en el Código Civil y la legislación específica. (artículo 23 LM)
- Se mantiene la figura de los montes *protectores*, pero con una redefinición importante. Son montes exclusivamente privados que cumplen alguna característica para ser montes de utilidad pública. Se crea un Registro Nacional de Montes Protectores, como forma de englobar la información de los Registros que cada CCAA tiene el deber de crear. ¹⁴(Art. 24 y ss. LM)

5.4. Simplificación administrativa de los instrumentos de gestión y de los procedimientos de administración forestal.

Otra de las modificaciones es la relativa a los instrumentos de gestión y de los procedimientos de administración forestal. La gestión forestal es el epicentro en torno al que giran muchos de los elementos de la regulación de los montes. La ordenación de los montes supone la organización técnicamente justificada de los recursos forestales, de los aprovechamientos del monte y de las especificaciones técnicas para la gestión sostenible. (Art. 6.e). LM).

La planificación forestal se articula a través de la Estrategia Forestal Española, el Plan Forestal Español y los Planes forestales autonómicos. La figura más significativa es la de los PORF (planes de ordenación de los recursos naturales, siendo los instrumentos por excelencia en el marco de la ordenación del territorio. Estos planes son elaborados por las AAPP de las CCAA.

Antes de la modificación, cualquier tipo de monte debía contar con un instrumento de ordenación forestal. Ahora, solo se mantiene la obligatoriedad de ordenación para los montes que cumplan una función pública. (art.33.2. LM).

También se han ampliado los plazos para poder acogerse a los incentivos económicos para montes no ordenados. Hasta el momento el plazo para acogerse a los incentivos era de 10 años, cumplidos en 2014. Con la reforma, se establece un plazo de 15 años a contar desde la entrada en vigor de la ley (DT 3ª LM). En el caso del plazo para disponer de un instrumento de gestión forestal como requisito necesario, contarán con un plazo de 25 años desde la entrada en vigor de la ley (DT 2ª LM), dejando atrás el plazo de 15 años que introdujo la modificación de 2006 de la LM.

Otras de las modificaciones es la simplificación de los trámites administrativos en algunos procedimientos, véase el aprovechamiento leñoso de los montes privados. (Art 37 LM). Para los aprovechamientos de turno corto (inferior a 20 años y los que establezcan las CCAA), solo se deberán comunicar con una declaración responsable de que no necesitan dicha autorización (art. 37.2.b) LM). Dicha regulación también aparece en la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (arts. 10,11 y 13).

También se ha incluido el concepto de “planificación subsidiaria” o “sistema de adhesión”, siendo un modelo de gestión para montes de pequeño tamaño siempre que las CCAA lo permitan. Consiste en contar con un modelo de gestión al que los pequeños propietarios forestales puedan acogerse fomentando así la ordenación forestal.

En el caso de las modificaciones sobre los instrumentos de gestión, puede que no persigan el objetivo de incentivar la ordenación de los montes. No se necesita tanto que la obligatoriedad se relaje, sino que se propongan algunas medidas que favorezcan el uso de los instrumentos de ordenación, ya sean normativas y económicas, teniendo en cuenta el alto coste de los instrumentos de ordenación forestal. Algunas corrientes confían en que al ser ahora decisión de las CCAA, éstas lleven a cabo dichas medidas y apuestas por la regeneración de los instrumentos de gestión.

5.5 Potenciación de la Certificación Forestal (PEFC)

La Certificación Forestal, ya existente en la LM de 2003, se ha utilizado como instrumento de sostenibilidad para la gestión forestal: es una herramienta de garantía para la planificación y ejecución de unas políticas forestales sostenibles, además de controlar el mercado europeo e internacional en productos forestales. Es una marca de identidad sostenible (art 35 LM).

Para declarar un monte como certificado, el monte en cuestión debe contar con un plan de gestión vigente. En los últimos años se ha incrementado la certificación de los montes españoles, pues se han llevado a cabo iniciativas como los “Proyectos Pilotos”¹¹ y la promoción de instrumentos de planificación colectiva de montes privados.

En España, hay 1.967.418 hectáreas de monte certificado, según los últimos datos facilitados por PEFC (Asociación Española para la Certificación Forestal), perteneciendo a las administraciones públicas el 72% del territorio certificado en Gestión Forestal Sostenible y el 28% restante a manos privadas. Navarra es líder en superficie ordenada y certificada en relación a su superficie arbolada (60 %). ANEXO IV (mapa)

Además, se ha perfeccionado lo relativo al comercio de madera legal aplicando un sistema de trazabilidad que permite evitar la introducción en el mercado europeo de maderas y productos no legales (art 35 bis). Es una medida impulsada por las exigencias que los Reglamentos europeos han impuesto, véase el Reglamento (CE) núm. 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema legal de licencias FLEGT.

5.6. Regulación nueva de los montes de socios y la creación de Sociedades Forestales

Se añade una nueva figura, los *montes de socios* (art. 27 bis), que son aquellos montes que conocíamos como pro indiviso (DA 10ª ley modificada) cuya titularidad corresponde a varias personas pero no se conoce su identidad. Es una “*figura híbrida*”

11. Proyectos Piloto: “desarrollo forestal sostenible 2013”, “zonas rurales a revitalizar”.... (Salvador del Pozo, 2013).

*entre el derecho público y privado susceptible de un estudio más detallado, sobre todo e en lo referente a la naturaleza jurídica de la cuota y la posibilidad de emprender la división de la cosa común”*¹².

Se modifican algunos aspectos de su gestión que hacen más sencillo la formalización de una junta gestora, que es la encargada de la gestión forestal de este tipo de montes, pudiendo evitar el abandono o deterioro de los mismos. Se regirán por lo dispuesto en el Código Civil. No deja de ser una medida para impulsar el resurgimiento del patrimonio Forestal, pues, como apuntábamos anteriormente, podríamos hablar de casi un millón y medio de hectáreas abandonadas. Se ha criticado de esta nueva legislación la no intervención de la Administración forestal para que controle la regularidad del proceso.

Por otro lado, como medida para incentivar la gestión de “*micro propiedades forestales divisas*” incluye las *Sociedades Forestales* (DA 5ª LM). Las Sociedades Forestales son “*sociedades de responsabilidad limitada constituidas por titulares de derechos de uso de pequeñas parcelas forestales*”.

El uso de los terrenos se cede a la sociedad, conservando todos los derechos y prerrogativas dominicales excepto la gestión forestal, a cambio de unos beneficios. Se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el RDL 1/2010, de 2 de julio. En cuanto al régimen fiscal, tendrán un régimen fiscal especial por Impuesto sobre Sociedades, Ley 27/2014, de 27 de noviembre, con una deducción del 10% de los gastos e inversiones destinado a la conservación, mantenimiento, mejora, protección y acceso al monte para las Sociedades Forestales.¹⁷

5.7. Promoción de la biomasa forestal como fuente de energía renovable

*“La biomasa representa una alternativa viable de futuro para movilizar recursos forestales inmovilizados o infrautilizados, o madera, y obtener beneficios económicos para los montes.”*¹⁴

12. Blasco Hedo, Eva.. Actualidad Jurídica Ambiental

13. Creación promovida por el Decreto 45/2011, de 10 de marzo, de la Junta de Galicia.18. Preámbulo Ley 21/ 2015, de 20 de julio

14. Orden de 30 de enero de 2012, de Castilla y León, Orden 665/ 2014, de 3 de abril, por la que se aprueba la estrategia de calidad del aire y cambio climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020; Decreto 13/2013, de 26 de febrero, de Extremadura, entre otras

El Gobierno, junto con las CCAA, ha elaborado una estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal (DA 4ª LM), uso del que se beneficia la gestión forestal del monte. Las CCAA han sido precursoras en este tema, pues desde 2012 existen medidas en diversas Comunidades que promocionan la biomasa forestal.¹⁸

5.8 Otras medidas relativas a los incendios, la caza, acceso público a los montes.

Una de las modificaciones que ha suscitado más controversias ha sido la relativa a los incendios forestales. La LM reserva del artículo 43 al 50 para regular la responsabilidad de la organización de la defensa contra los incendios forestales a través de medidas conducentes a la prevención, detección y extinción de los incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad de los montes. La controversia ha suscitado en la modificación del artículo 50.1 LM sobre el cambio de uso forestal del terreno incendiado. Se mantienen los 30 años de prohibición, pero se añade una excepción que ha provocado polémica. Se permite a las CCAA un cambio de uso forestal antes de los 30 años *“cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley...”*

Las organizaciones ecologistas y los agentes forestales se mostraron muy descontentos con esta modificación por entender que con ella se apostaba por los intereses privados frente a los públicos.

Otro de los puntos más problemáticos de la reforma es que no se considera correcta la actuación del legislador. En este caso, al considerar que se produce una desprotección medioambiental que acabará por convertir a la Administración en *“servidora de intereses privados permitiendo la reutilización de un terreno incendiado con la única finalidad de equilibrar la balanza”* ²⁰ relativo al acceso a los montes y el uso de las pistas forestales (art. 54 bis LM). La prohibición expresa de la circulación de vehículos de motor por las pistas forestales que se imponía anteriormente pasa a ser competencia de cada CCAA, que deberá regularla expresamente. Esto provoca diferencias en el panorama nacional actual, donde comunidades como Cataluña, pionera en regular este aspecto, tienen una regulación muy específica, y en cambio, otras, como Murcia, no han regulado sobre el acceso a los montes y ahora se crea una “laguna legal”. (ANEXO V: tabla de regulaciones).

Un ejemplo europeo en este sentido es la modificación de la “*Ley Lalonde*” francesa, donde ahora se define a los caminos como “vías de comunicación creadas por el hombre y destinadas a la circulación de los bienes y de las personas”, reconociendo así el enfoque deportivo y turístico en materia “*off road*”.

En todo caso, la DA 6ª determina una prohibición expresa de los vehículos motorizados en los Caminos Naturales, además de una modificación sustancial en materia de infracciones, rebajando a “*leve*” las infracciones de este tipo (art 67.k. LM).

La disposición Adicional cuarta se ha reservado a la caza y pesca, estableciendo la elaboración de una “*Estrategia Nacional de Gestión Cinegética*” para constituir un marco orientativo de coordinación para la ordenación a escala nacional. Además, se ha creado un Registro Español de Infractores de Caza y Pesca, en el camino de coordinación entre las Comunidades Autónomas.

5.9. Otras medidas

Esta modificación de ley también ha llevado cambios menos significativos, pero que también tienen su importancia. Entre ellos encontramos la coordinación de las distintas administraciones para la protección del patrimonio forestal. No hay que olvidar que es una competencia “compartida” y que para un correcto cumplimiento de los objetivos generales que el artículo 7 LM le atribuye a la Administración General del Estado. Dichas facultades, con la reforma, se sintetizan y se mejora el apoyo a las Comunidades Autónoma. Asimismo, se mantiene la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural como órgano de coordinación y, además, se recupera el Consejo Forestal Nacional (art. 10 LM), como órgano consultivo del Ministerio.

En otro punto, se crea el Registro Nacional de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales. Tendrá carácter informativo y funcionará como “*instrumento de cumplimiento de la trazabilidad de los productos forestales y de la diligencia debida que deben tener a efectos de legalidad*”, además de ser fuente de información estadística

Se modifica también el régimen de los agentes forestales y las potestades administrativas de extensión, policía y guardería forestal.

Por último, hacer mención a las modificaciones llevadas a cabo en el procedimiento sancionador. Hasta el momento, las infracciones o sanciones se modulaban exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo necesario de recuperación del

daño ambiental resultando deficiente en algunas ocasiones. Se introduce una nueva medida moduladora para las infracciones sin olvidarse del tiempo de recuperación ni de la estimación de los daños ocasionados en relación con el valor de reposición. Funcionará como agravante para considerar las infracciones como graves o no graves.

Lo más importante es una nueva infracción relativa a la legalidad de los productos madereros, ya que el Reglamento nº 995/ 2010 del Parlamento Europeo del Consejo, del 20 de octubre, impone sanciones contra la tala ilegal. El objetivo es asegurar la comercialización legal de la madera.

6. LEY RIOJANA DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO FORESTAL.

Siguiendo lo establecido en la Constitución Española, en el artículo 149.1.23, el Estado tiene competencia para legislar las bases en materia de montes y aprovechamientos forestales, por lo que las CCAA tienen potestad para el desarrollo legislativo y ejecución en esta materia. Tanto es así, que La Rioja lo incluye en el Estatuto de Autonomía (LO 3/1982, de 9 de junio) en su artículo 9.11. , determinando que le corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de “montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos.”

El Gobierno de La Rioja vio la necesidad de establecer un marco legal en el que desarrollar la política forestal y el aprovechamiento de los montes. Para ello, contamos con la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, y posteriormente con el Decreto 114/ 2003, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha ley. Se debe tener en cuenta respecto a esta legislación la *Resolución nº 20/2001, de 13 de febrero*, los numerosos decretos que afectan a esta materia, véase el *Decreto 1/2015, de 9 de enero, por el que se regula la recolección micológica en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja*, y las respectivas ordenes de las distintas Consejerías que tiene potestad sobre la materia. Mención especial a la Ley 14/2015, de 23 de diciembre, para la aprobación y autorización del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Junta de Castilla y León en materia de extinción de incendios forestales, en consonancia con la coordinación y apoyo que se les exige a las Comunidades Autónomas .

La Ley 2/1995 tiene por finalidad, tal y como establece su artículo 1, “*establecer el régimen legal para la protección y mejora de la flora y el patrimonio forestal de La Rioja*”, siendo de aplicación a todos los montes y terrenos forestales de la CAR. Por consiguiente, la finalidad del Reglamento es el mero desarrollo de la Ley de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja que, por cuestiones principalmente técnicas, se consideraba necesario.

6.1. Diferencias en la legislación estatal y la Ley de protección forestal riojana.

Siguiendo la estructura de las modificaciones más significativas de la Ley 21/2015, vamos a ir analizando cómo afectan éstas a la Ley de protección forestal riojana de 1995. Pues esta ley, pese a ser anterior a la LM, ha sido objeto de algunas modificaciones: siete en concreto¹⁵, aunque es cierto que cuenta con un Reglamento de 2003 que precisó algunas de las directrices que marcó la LM.

6.1.1. Concepto de montes

Las modificaciones incluidas en la Ley 21/2015 no afectan a la ley riojana. La modificación relativa a los terrenos agropecuarios ya se encuentra incluida en el Reglamento (art. 2.3 Decreto 114/2003). Aunque no utilice la misma terminología, incluye dentro de la categoría de montes las superficies agrícolas rústicas que se dediquen temporalmente al cultivo forestal, incluso establece un periodo máximo de 15 años.

Respecto a las otras precisiones que detallábamos anteriormente de la Ley 21/2015, tampoco provocarían ninguna modificación en la ley riojana. Al igual que sucedía en el caso anterior, no usa los mismos términos para explicar ciertos terrenos, pero en los preceptos del art. 4 de la Ley como en los artículos 2 del Reglamento se entienden incluidos los terrenos adhesados y los terrenos protegidos.

Es más, la legislación riojana, tanto Ley (Título III, arts. 23 a 32) como Reglamento (Título III, arts. 36 a 45), cuentan con un apartado especial para la protección y defensa de la flora, donde se desarrollan todas las directrices relativas a las

15. Ley 7/2000, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas; Ley 10/2002, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas; Ley 13/2005, de 16 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas; Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, Ley 7/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

especies amenazadas de flora de la Rioja. Incluso se crea un Catálogo Regional de Especie de Flora Silvestre amenazadas (Decreto 59/1998).

6.1.2. Principios y objetivos inspiradores

La Ley 2/1995 reserva los artículos 2 y 3 para detallar sus principios y objetivos. Entre ellos, podemos encontrar principios y objetivos medioambientales, de carácter económico, social e incluso con efectos institucionales. La ley riojana no hace mención expresa al principio inspirador de “infraestructura verde” que se ha incorporado por las políticas europeas. Es cierto que, entre los principios y objetivos específicos de la ley riojana, incluso en la importancia del uso recreativo de los montes (art. 75 y ss. Ley 2/1995), se entiende incluida la función medioambiental y sostenible de los montes, pero en una futura reforma sería conveniente incorporarlo o hacer algún tipo de alusión específica a las nuevas concepciones introducidas con la reforma por influencia de la normativa europea.

Lo mismo sucede con el nuevo concepto de “multifuncionalidad” de los montes. Obviamente, en la Ley 2/1995 no hay un artículo específico para definir la multifuncionalidad como tal. Este principio viene a justificar y englobar los tres pilares fundamentales que deben prevalecer en la regulación de montes. Aunque no aparezca como tal, la ley riojana engloba aspectos ambientales, económicos y sociales entre sus principios y objetivos, por lo que, como sucedía con el nuevo principio inspirador, no es estrictamente necesaria su inclusión. Si sucediera una modificación de la ley, sería conveniente incluirlo.

6.1.3. Clasificación más específica de los montes

El tema de la clasificación de los montes es algo más compleja, ya que la Ley 2/1995 no seguía el esquema de la LM. El artículo 5 de la ley riojana de protección forestal distingue entre montes privados y públicos, por razón de su titularidad, tal y como lo hace la LM, pero en razón de sus cualidades, se decanta por otra clasificación: montes de utilidad pública, para montes de titularidad pública que reúna características para el interés general; montes protectores, montes privados que tengan algún tipo de condición para el interés general ; y un tercer grupo al que llama montes sin catalogar en el que engloba el resto de montes.

Respeto al contenido esencial de la clasificación de montes, se puede encuadrar en la nueva clasificación disjunta de la LM, pero ese último grupo queda demasiado abierto. Sí se debe seguir la idea de una clasificación estable y certera de los montes como considero que persigue la nueva clasificación de montes en la LM. Los montes sin función de interés general, tanto públicos como privados, deben clasificarse más explícitamente, olvidándose de ese grupo tan abierto que podría ocasionar problemas a la hora de la gestión los montes.

Hay modificaciones más sustanciales en relación con la nueva clasificación que también afectan a la ley riojana y que pueden ser problemáticas debido a ese grupo confuso del que hablamos. La Ley 2/1995 no recoge ninguna especificación sobre los montes privativos, por lo que habría que incluir, además de una clasificación más específica, apreciaciones que han sido modificadas y que tienen relevancia.

- La modificación sobre el régimen de los montes públicos de uso privativo mediante concesión.
- El Registro en el Código Civil y la legislación específica de los montes privados por sus titulares.

A parte de esta modificación, hay que decir que la ley de protección forestal de La Rioja podría considerarse como “pionera”. La nueva clasificación disjunta de montes establecida con la modificación de 2015 ya estaba establecida en ella. Por ejemplo, los montes protectores son solo los montes de titularidad privada, siendo ésta una de las modificaciones de la ley. La Rioja ya contaba con un Catálogo de Montes Protectores (art 19.2 Ley 2/1995), por lo que ya tenía el trabajo hecho de cara al Registro Nacional incorporado con la reforma de 2015 de la LM. Pero hay una diferencia importante, el Catálogo autonómico tiene carácter administrativo y el Registro Nacional solo informativo.

6.1.4. Instrumentos de gestión y de los procedimientos de administración forestal

La ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, determina la obligatoriedad de contar con un proyecto de ordenación para los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los montes protectores. (art 63). No incluyó desde el principio la obligatoriedad para la

ordenación del resto de montes, por lo que la modificación relativa a ello no le afecta. Sí tendrá que tener en cuenta los nuevos plazos establecidos por la LM para aprovecharse de los incentivos y para la obligatoriedad de ordenación.

El Reglamento que desarrolla dicha ley, recogido en el Decreto 114/2003, de 30 de febrero, incluye en su articulado la creación de un Plan Forestal para toda la CAR. Y así lo llevo a cabo el Gobierno de La Rioja en 2004, aprobando un Plan Estratégico de Conservación del Medio Natural-Plan Forestal de La Rioja. Así, pasa a constituir el instrumento básico para crear un modelo propio de gestión del medio natural riojano que integre la acción forestal sobre los montes con la conservación de la biodiversidad.

Se configura con ello un documento que establece una serie de objetivos y una amplia propuesta de acciones, que se desarrollarán en distintas fases hasta el año 2023. También incluye algunos objetivos como el uso recreativo del medio natural, la sensibilización social y la educación ambiental, la investigación y la formación forestal.

En relación a los aprovechamientos leñosos, la legislación riojana determina en su artículo 65 que se requiere autorización de la Consejería competente para llevarlo a cabo. En relación a los que no cuenten con un PORF, establece que “*quedarán reducidos a cortas de saneamiento y mejora.*” (art. 63.2), pero sin excluirles de la autorización previa. Se deberá entonces aplicar la especificación incluida en la ley de montes para no incurrir en error.

Entendemos que las modificaciones relativas a la gestión forestal no afectan significativamente a la ley riojana relativa a montes, pero lo que sucede es que a la hora de aplicarla se deben tener en cuenta en cuenta las especificaciones de la legislación básica y las nuevas responsabilidades que las CCAA deben desempeñar.

6.1.5 Potenciación de la Certificación Forestal (PEFC)

La ley riojana no hace mención a la certificación forestal como tal, pero su Plan de Gestión Forestal lo incluye como uno los requisitos establecidos en las normas de la gestión forestal sostenible. El Gobierno de La Rioja, como AAPP, debe impulsar la Certificación Forestal tanto para la producción de los montes de gestión pública como privada, siguiendo lo establecido en el art. 35 LM

En el año 2003, se elaboró y puso en marcha la Estrategia para la Certificación Forestal de los Montes de Gestión Pública del Gobierno de La Rioja. Siguiendo lo establecido en la LM y la normativa europea, en La Rioja se estableció el sistema PEFC, una certificación individual para todos los montes ordenados.

En La Rioja se cuenta con más de dos terceras partes de la superficie forestal susceptibles a este proceso, considerándose como “*un paso importante en el camino hacia la gestión forestal sostenible*”. Se cuenta con 70.924,467 hectáreas de montes certificados, un 23% de la superficie forestal de la región y un 35% del territorio forestal declarado de utilidad pública.

Tal y como establece el Plan Forestal de La Rioja, el objetivo en estos espacios es alcanzar la gestión forestal sostenible, es decir, administrar y utilizar los montes de modo que se mantenga su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración y su potencial para cumplir funciones ecológicas, sociales y económicas sin causar daño a otros ecosistemas. Este plan establece un impulso de acciones para la mejora de la comercialización de los productos forestales, subvenciones y ayudas para la mejora de la rentabilidad de las inversiones en cultivos forestales, en otros.

Con todo esto, podemos considerar que La Rioja ha llevado a cabo un buen trabajo respecto a la certificación forestal, a pesar de no incluirla en su legislación. Sería conveniente incluirla de algún modo, además de considerar que La Rioja establezca más medidas y más ayudas para establecer la Certificación Forestal y aumentar el número de hectáreas certificadas con el objetivo de la potenciación de la Certificación que establece la LM.

6.1.6. Regulación de los montes de socios y la creación de Sociedades Forestales

La modificación de 2015 a la LM incluye dos nuevas figuras, los montes de socios y las Sociedades Forestales, pensadas para regular los montes que pertenecen a más de un individuo. Ninguna de estas figuras aparece reconocida en la Ley 21/1995 de ninguna forma ¹⁵.

La LM atribuye a las CCAA competencias sobre el control y regulación de las Sociedades Forestales (DA 5ª.4). Además, de las competencias como AAPP que les

15. Otras leyes autonómicas, como la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de montes de Aragón tampoco reconocen estas nuevas figuras.

corresponderán dentro de la gestión de los montes de socios. Esto nos lleva a considerar en reconocimiento de estas nuevas figuras en la legislación autonómica.

6.1.7. Biomasa forestal como fuente de energía renovable

La LM determina que “el Gobierno elaborará, en colaboración con las comunidades autónomas, una estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal”, en sintonía con la cooperación entre AAPP como pilar fundamental para muchos de sus cambios.

Las CCAA llevan impulsando esta forma de energía renovable mucho antes de esta reforma. En La Rioja, en 2013, se construía el primer Centro de Producción y Distribución de biomasa. Según datos de 2013, La Rioja era una de las CCAA con menor número de instalaciones de biomasa.

No encontramos ninguna referencia en la normativa forestal de La Rioja. Bien es cierto que, la biomasa forestal no deja de ser una forma de aprovechamiento de los montes. La legislación riojana, además del PORF, reserva un lugar importante en relación a los aprovechamientos. Su artículo 61.1. determina que todos los aprovechamientos forestales que se realicen en los bosques riojanos “*tendrán la consideración de recursos naturales renovables*”. Además, el Decreto 114/2003, que desarrolla el Reglamento de la ley, tiene una detallada clasificación sobre los aprovechamientos, sus tipos y el tipo de monte en el que se llevan a cabo.

Podríamos entender que, hasta el momento, se ha aplicado lo relativo a los aprovechamientos forestales con las directrices del Plan de Energías Renovables que Estado y CCAA han llevado a cabo con objetivo de 2020 ¹⁶. Por ello, y visto la importancia que se le ha dado en la nueva ley de montes a esta fuente de energía, sería conveniente una incorporación a la legislación riojana de lo relativo a la biomasa que corresponda a la Comunidad de La Rioja como energía renovable. No deja de ser una de las incorporaciones causada por las directrices medioambientales de Europa.

16. Plan 2011-2020: Este Plan incluye el diseño de nuevos escenarios energéticos y la incorporación de objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, la cual establece objetivos mínimos vinculantes para el conjunto de la Unión Europea y para cada uno de los Estados miembros.

6.1.8 Otras medidas relativas a los incendios, la caza, acceso público a los montes.

La LM atribuye muchas competencias en materia de incendios a las CCAA. Son las encargadas de la prevención, detección y extinción de los incendios forestales, incluso del procedimiento sancionador en caso de provocarse un incendio. Así lo hace la ley riojana, y así lo establece en la legislación (art. 45 y ss.).

La Rioja, con más de una cuarta parte de su territorio cubierta por formaciones arboladas, ha hecho de la prevención y lucha contra los incendios forestales un pilar básico de la gestión de sus montes. El Gobierno de La Rioja cuenta con un Plan General de Protección, desde 2012, contra Incendios de los Sistemas Forestales de la CAR con el objetivo de prevenir al hacer uso del fuego y evitar así las negligencias, y aumentar los medios de extinción y su eficacia para que los daños de los incendios una vez producidos sean los mínimos.

Como dato significativo, el Gobierno de La Rioja cuenta con un Convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León en materia de extinción de incendios ¹⁷. Además, cuenta con una Orden Anual sobre prevención de incendios ¹⁸.

Podríamos considerar con todo esto que La Rioja lleva a cabo unas políticas excepcionales en materia de incendios forestales, pero la controversia viene con la nueva reforma sobre el cambio de uso de los montes o terrenos forestales incendiados.

La ley riojana no permite bajo ningún concepto el cambio de uso de estos terrenos, contradiciendo lo que establece la LM en la actualidad. La Rioja no tiene en cuenta el plazo mínimo de 30 años ni la excepción recientemente incorporada. Lo único que La Rioja determina es la no transformación en suelo agrícola pasados 20 años, destinarlos a actividades extractivas en 10 años o al pastoreo en los 5 siguientes. La excepción introducida en el párrafo segundo del art.50.1. LM puede crear controversias, por lo que su incorporación sería más que conveniente.

17..Ley 14/2005, de 23 de diciembre, para la aprobación y autorización del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Junta de Castilla y León en materia de extinción de incendios forestales.

18. Orden 4/2017, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de La Rioja para la campaña 2017-2018

En materia de caza y pesca, La Rioja cuenta con normativa específica (Ley 2/2006, de 28 de febrero, de Pesca de La Rioja, Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja). La única mención que encontramos en el Reglamento, art. 91, referido a los aprovechamientos cinegéticos, es la distinción entre montes de utilidad pública y montes incluidos en reservas regionales de la caza y catas sociales. Las modificaciones que se han introducido a la LM no afectan en materia autonómica, por lo que más allá de colaborar para el cumplimiento de ellas, a La Rioja no se le atribuye ninguna función.

En relación al acceso motorizado a los montes, La Rioja ya contaba con su propia regulación desde 2003. Ha sido una de las pioneras en regular esta materia y aprovechó el Reglamento de 2003 para introducirlo (arts. 117 y ss.).

Dicha regulación se encarga desde definir lo que entendemos por camino de carácter forestal hasta las actividades deportivas con vehículos motorizados. Establece unas normas generales, restringiendo la velocidad, la contaminación acústica, los vehículos permitidos y la prohibición del uso motorizado en horario nocturno. En La Rioja, está permitida la circulación de vehículos motorizados por ciertas pistas forestales que la norma especifica, restringiendo el acceso al resto de viales y por campo a través. Podríamos considerar así, que La Rioja ya se había adelantado a esta nueva modificación de la LM.

6.1.9. Potestad sancionadora

Al analizar con detenimiento ambas regulaciones de la potestad sancionadora, se pueden apreciar algunas diferencias significativas que ocasionarían una modificación urgente de la ley riojana por ser incongruentes.

En primer lugar, hay que introducir una nueva infracción establecida por la normativa europea referida a la comercialización ilegal de madera. Podemos apreciar también que, sin salirse de lo establecido en la LM, las infracciones en materia de fuego en los montes y alrededores en el listado riojano son más específicas, siguiendo la línea de ser una de sus mayores preocupaciones.

En segundo lugar, encontramos diferencias en la clasificación de las infracciones. Ello se debe a que en la ley riojana no se clasifican en razón a la estimación de los daños ocasionados, lo que hace que encontremos diferencias. Este nuevo modelo de calificación de las infracciones debería integrarse en la ley riojana y tenerse en cuenta

hasta el momento de su implantación. En relación a esto, en la clasificación de las infracciones se menciona la reincidencia de las faltas, donde encontramos también discrepancias. La LM considera que existe reincidencia transcurridos un año en faltas leves, dos en graves y cinco en muy graves, mientras que la ley riojana determina tres años para todas las infracciones. Otra puntualización más objeto de reforma.

Y por último, volvemos a tener problemas en la prescripción de las infracciones tipificadas, donde La Rioja determina tres años para faltas graves, mientras que la LM determina tan solo dos.

CONCLUSIONES

Persiguiendo el objetivo de mejorar la gestión forestal, tal y como la propia ley 21/2015 detalla en su exposición de motivos, se llevaron a cabo las modificaciones oportunas. En un plano general, estas modificaciones siguen sin estar a la altura de las circunstancias.

En primer orden, decir que es cierto que la ley incluye muchas de las demandas autonómicas, incluso aspectos introducidos en algunas leyes autonómicas previas a la Ley de montes del 2003 que desarrollaron sus competencias en materia de montes. Algunas han sido pioneras en algunos aspectos, como Cataluña, en el acceso motorizado; y Aragón, en relación las nuevas figuras forestales, entre otras. Incluso se han incorporado a la Ley algunas de las políticas impuestas por Europa que hacen que la ley resulte algo más ajustada a nuestro tiempo (nuevo principio inspirador, potenciación de la biomasa).

Modificaciones sustanciales como la nueva clasificación de montes, la matización en el concepto de montes, la creación de los montes de socios y las sociedades forestales, cambios en el régimen sancionador han sido alabadas, puesto que la necesidad de cambio era evidente y ese cambio ha sido acercado con el fin mejorar y actualizar la ordenación de los montes españoles.

En segundo lugar, y en un punto totalmente contrario, tenemos otras modificaciones, como son la relativa al acceso motorizado de los montes y el cambio de uso del suelo incendiado. Han sido objeto de numerosas críticas al considerar que ambas medidas dejan más desprotegido al suelo forestal de sus principales enemigos, el fuego y, en algunas ocasiones, el hombre con un mal uso.

Es una materia difícil, pues al ser competencias “compartidas” entran en juego muchos factores que deben compenetrarse y conseguir una protección eficaz. Y ese puede que siga siendo el problema. Llevando a cabo una comparativa con la ley relativa a montes en nuestra Comunidad, hemos encontrado que algunas de esas modificaciones provocan un problema a la hora de aplicarla. Algunos de los cambios no afectan para nada a la normativa autonómica, otros simplemente conllevan una especial atención a la legislación básica a la hora de aplicarla. Pero hay una serie de cambios que podría considerarse objeto de modificación de la ley riojana para que no haya problemas.

Y en tercer y último punto, bajo mi humilde opinión, me atrevo a considerar que las modificaciones son insuficientes y algunas incluso llegan tarde. La normativa autonómica riojana ya había desarrollado en su legislación algunos de los cambios que se han llevado a cabo con la reforma de 2015. Otros no se incluían en la legislación riojana, pero sí en otras normativas autonómicas.

Y respecto a la propia normativa riojana sobre montes, tras el análisis llevado a cabo haciendo una comparativa de la actual ley de montes, después de las modificaciones de 2015, podemos afirmar que dicha normativa riojana debería ser objeto de revisión para incorporar las modificaciones que le afectan y no caer en contradicciones con la legislación básica, provocando la violación de lo dispuesto en la CE.

La incorporación de la certificación forestal en la ley, aunque La Rioja ya lleve a cabo medidas relativas a este punto; reconocimiento de las nuevas figuras forestales dentro de la legislación específica, como son los montes de socios y las sociedades forestales; mención expresa a la biomasa dentro de la ley, debido a la importancia que la nueva LM le ha brindado, serían las modificaciones de índole menor que hemos encontrado tras el análisis.

Pero nos encontramos con otras dos que provocan la modificación necesario de esta ley. La nueva excepción incluida en el cambio de uso de los incendios forestales, que deja una vía de escape a la prohibición expresa que la ley riojana determina, por lo que sería conveniente incorporarla y tenerla en cuenta. Sobre todo, los múltiples cambios introducidos en la potestad sancionadora que se contradicen con lo dispuesto en la legislación de nuestra comunidad provocando una reforma necesaria de la ley.

BIBLIOGRAFÍA

A) Libros

BLASCO HEDO, E., *Propiedad forestal privada y energías renovables*, Thompson Reuters Aranzadi, 2015.

BUSTILLO BOLADO, R., *Derecho rural y gestión sostenible de los montes*, Madrid, Yuste, 2005.

CALVO SÁNCHEZ, L., *La génesis histórica de los montes catalogados de utilidad pública (1855-1901)*, Madrid, 2001.

CALVO SÁNCHEZ, L. (coord.), *Comentarios sistemáticos a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes: estudios de derecho forestal, estatal y autonómico*, Thomson-Civitas, Madrid, 2005.

KARRERA EGIALDE, M., *Derecho de montes y propiedad privada*, Madrid, 2015.

LÓPEZ RAMÓN, F. (coord.), *Observatorio de Políticas Ambientales 2015*, págs. 658-691. Pamplona, Thomson-Aranzadi, 2015.

RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, B., “Montes: la gestión sostenible en la normativa de última generación”, en F. López Ramón (coord.), *Observatorio de políticas ambientales 2015*, Thomson-Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 657-693.

B) Artículos

BLASCO HEDO, E., *Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes: principales novedades*, *Actualidad Jurídica Ambiental*, número 49

GIL DE GÓMEZ PÉREZ-ARADROS, C., *El concepto de Monte tras la Ley 21/2015. Evolución, definición y clases*. *Noticias Jurídicas*. 2016

KARRERA EGIALDE, M., *Sobre la función de los montes y su planificación*, *R.V.A.P. número especial 99-100*. Mayo-diciembre 2014.

LOZANO CUTANDA, B. *Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley de Montes: resumen en diez puntos*. Gómez-Acebo & Pombo. Febrero 2016.

MORENO MOLINA, J.A., , *Protección jurídica de los montes*. AAVV, Derechos de los Bienes Públicos, Aranzadi Civitas. 2009.

PERNAS, B., *La reciente ley de montes y los incendios forestales*, En el campo de la ley, septiembre 2006

C) Páginas web

Boletín Oficial del Estado <https://www.boe.es/>

Boletín Oficial de La Rioja <http://www.larioja.org/bor/es>

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
<http://www.mapama.gob.es/es/>

Plan Energías Renovables 2011-2020 http://www.minetad.gob.es/energia/es-ES/Novedades/Documents/Resumen_PER_2011-2020.pdf

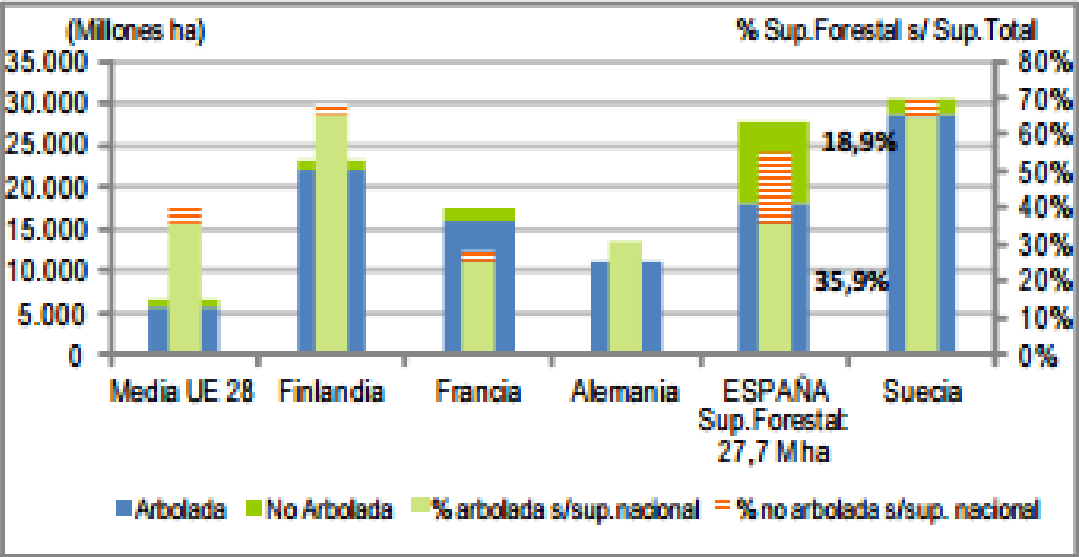
Prensa

ANEXO I: DIRECTORIO LEGISLACIÓN

Comunidad Autónoma	Legislación Forestal vigente a 30 de enero de 2013
Andalucía	<p>Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (se desarrolla mediante el Reglamento Forestal de Andalucía aprobado mediante Decreto 208/1997, de 9 de setiembre)</p> <p>Modificaciones de la Ley Forestal de Andalucía:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. Se deroga los artículos 47.2 y 76.7, así como los artículos 48.b), 61, 64.3 y 77.3 en lo que se refiere a caza, pesca y fauna cinegética. - Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. Deroga los arts. 44.1.a) y b), 50 a 55, 58, 59 y 76.10 y Disposición Transitoria quinta de la Ley 2/1992 a partir de la entrada en vigor de la Ley de prevención y lucha contra los incendios forestales.
Aragón	Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
Canarias	
Cantabria	La Ley de Montes de Cantabria está en fase de tramitación
Castilla-La Mancha	<p>Ley 3/2008, de 12/06/2008, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha</p> <p>OBS: Artículo 8: Redacción según Ley 7/2009, de 17 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los Servicios en el Mercado Interior.</p>
Castilla y León	Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León
Cataluña	<p>Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Cataluña.</p> <p>Ley 7/1999, de 30 de julio, del Centro de la Propiedad Forestal.</p> <p>Modificaciones de la Ley Forestal de Cataluña</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto Legislativo 10/1994, de 26 de julio, por el que se adecua la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña. - Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas - Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana - Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de Ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. - Decreto 35/1990, de 23 enero, por el cual se fija la unidad mínima forestal.
Comunidad Foral de Navarra	<p>Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre(BON nº 6, 14 de enero de 1991), de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra</p> <p>Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes en Desarrollo de la Ley Foral 13/1990.</p> <p>Modificaciones de la Ley 13/1990:</p> <p>Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, modificación del artículo 78.4. de la Ley Foral 13/1990, Ley 3/2007, de 21 de febrero, de modificación de la Ley Foral 13/1990</p>
Comunidad de Madrid	Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana	<p>Ley 3/93, forestal de la Comunidad Valenciana</p> <p>Desarrollada reglamentariamente por el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano</p> <p>Modificado por las siguientes leyes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de 1998, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y

ANEXO II: SUPERFICIE FORESTAL UE

Gráfico 1: Superficie Forestal en la UE

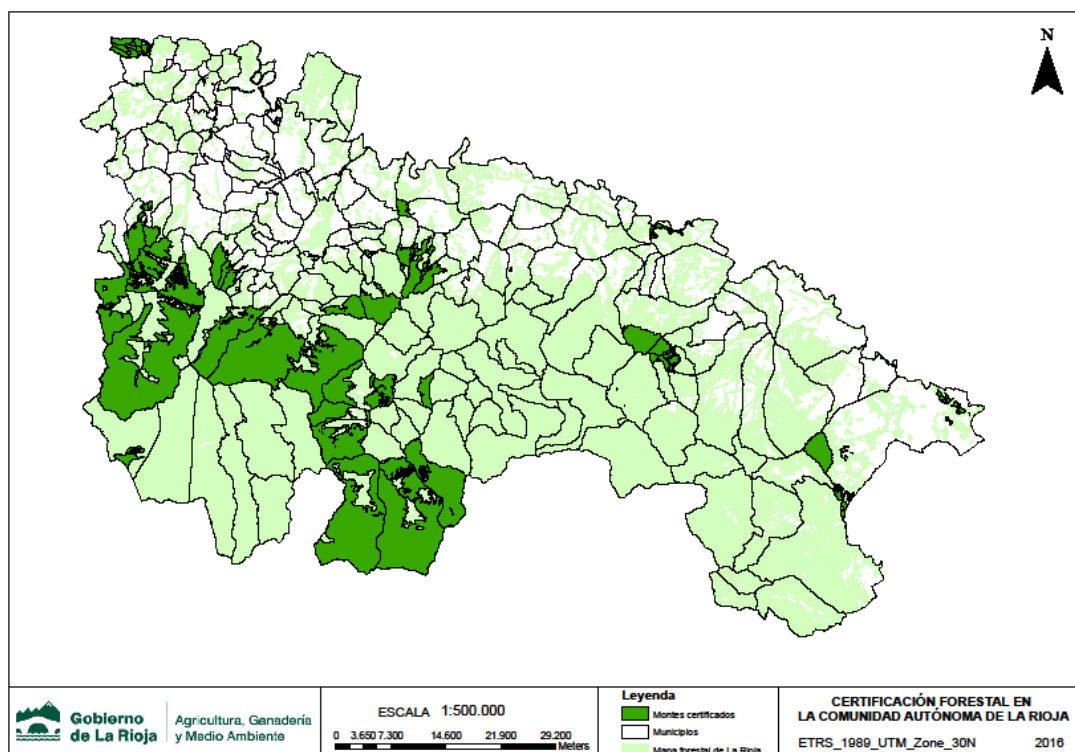
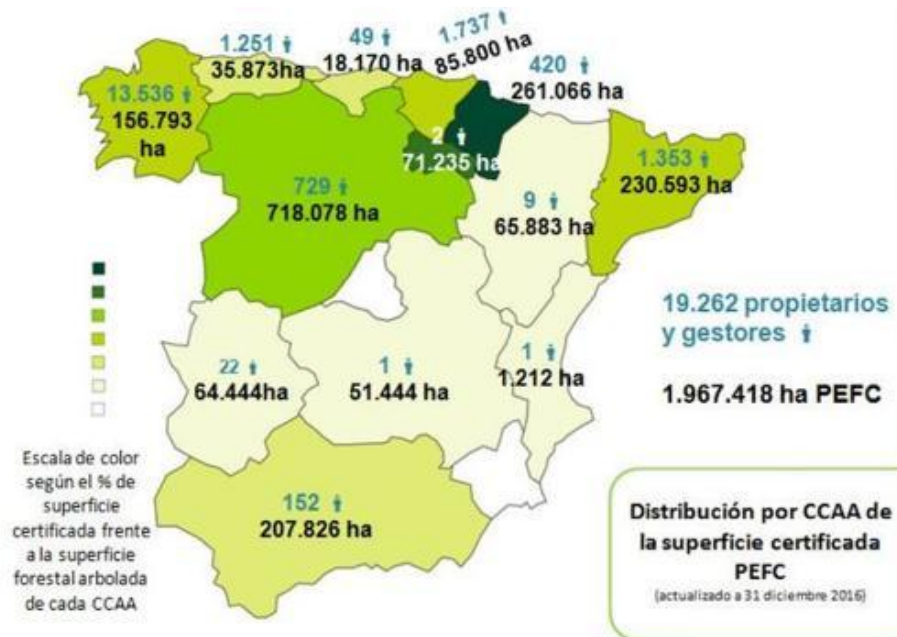


Superficie de bosque por habitante (hectárea / habitante)					
UE 27	España	Finlandia	Suecia	Francia	Alemania
0,3	0,4	4,1	3,1	0,2	0,1

ANEXO III: CLASIFICACIÓN MONTES

	PRIVADOS	PUBLICOS
FUNCIÓN DE INTERÉS GENERAL	Protectores	-De Utilidad Pública -Comunales -Otros que afecten al servicio público
	-Particulares	
NO FUNCIÓN INTERÉS GENERAL	-Vecinales en mano común	Patrimoniales

ANEXO IV: CERTIFICACIÓN FORESTAL



ANEXO V: REGULACIÓN AUTONÓMICA DEL ACCESO PÚBLICO A LOS MONTES

	CON REGULACIÓN ESPECÍFICA	SIN REGULACIÓN ESPECÍFICA
ANDALUCÍA		-Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. -Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía
ARAGÓN	-Decreto 96/1990, de 26 de junio, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula la circulación y práctica de deportes, con vehículos a motor, en los montes bajo la gestión directa de la Comunidad Autónoma de Aragón. - Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón (Art. 35). -Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.	
ASTURIAS		Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal (Art. 48)
BALEARES		Ley, 1/1991, de 30 de mayo, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de Especial Protección de las Islas Baleares.
CANARIAS	Resolución sobre regulación del tránsito motorizado por pistas forestales de 14 de abril de 2011. Decreto 124/1995 de 11 de mayo, por el que se establece el régimen general de uso de pistas en los Espacios Naturales de Canarias. Modificado por el Decreto 275/1996, de 8 de noviembre.	
CANTABRIA		Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.

CASTILLA LA MANCHA	Decreto 63/2006, de 16 de mayo, de uso recreativo, la acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio natural.	
CASTILLA Y LEON	-Decreto 4/1995, de 12 de enero de la Junta de Castilla y León, por el que se regula la circulación y práctica de deportes, con vehículos a motor, en los montes y vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León	
CATALUÑA	-Ley 9/1995, de acceso motorizado al medio natural. Modificada por la Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente	
EXTREMADURA		-Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. -Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura
GALICIA		-Ley 7/2012, de 28 de junio, de Montes de Galicia
MADRID	-Ley de la Comunidad de Madrid 8/1998, de 15 de junio de Vías Pecuarias	
MURCIA		-Ley, 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia Decreto 110/1998, de 27 de octubre. Circulación y práctica de deportes con vehículos a motor
NAVARRA	-Decreto Foral 36/1994, de 14 de febrero, por el que se regula la práctica de actividades organizadas motorizadas y la circulación libre de vehículos de motor en suelo no urbanizable	
PAIS VASCO	-Diputación Foral de Gipuzkoa.- Decreto Foral 29/1990, de 2 de mayo, por el que se regula la circulación de vehículos a motor en los montes patrimoniales de la Diputación Foral y de Utilidad Pública del Territorio Histórico de Gipuzkoa	

LA RIOJA	-Decreto 114/2003, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 2/1995 de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja	
VALENCIA	-Decreto 8/2008, de 25 de Enero, del Consell, por el que se regula la circulación de vehículos por terrenos forestales de la Comunitat Valenciana.	